



Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Málaga

C/ Fiscal Luis Portero García s/n, 29010, Málaga. Tfno.: 951939072, Fax: 951939172, Correo electrónico: JContencioso.2.Malaga.jus@juntadeandalucia.es

N.I.G.: 2906745320210002516. ASUNTO_REC ASUNTO_REC

Procedimiento: Procedimiento Abreviado 362/2021. Negociado: RM

Actuación recurrida: (Organismo: EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA)

De: REALE SEGUROS GENERALES, S.A. y [REDACTED]

Procurador/a: ANTONIO CASTILLO LORENZO

Letrado/a:

Contra: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Procurador/a:

Letrado/a: S. J. AYUNT. MALAGA

SENTENCIA Nº 303/2.023

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En la ciudad de Málaga a 3 de Noviembre de 2.023.

Vistos por mí, Dña. Marta Romero Lafuente, MAGISTRADA-JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número DOS de los de esta capital, el recurso contencioso-administrativo número 362/21 tramitado por el de Procedimiento Abreviado interpuesto por REALE SEGUROS GENERALES S.A. y [REDACTED] [REDACTED] representados por el Procurador D. Antonio Castillo Lorenzo contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA representado por el Sr Letrado Municipal.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Por la parte actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de Málaga de la reclamación patrimonial presentada por la misma, formulando demanda conforme a las prescripciones legales en la que solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación se dictara sentencia en la que se estimaran sus pretensiones.

SEGUNDO .- Una vez admitida a trámite la demanda se dio traslado de la misma y de los documentos acompañados a la administración demandada reclamándole el expediente, ordenando que se emplazara a los posibles interesados y citando a las partes para la celebración de la vista.

TERCERO.- Recibido el expediente administrativo se exhibió a la recurrente para que pudiera hacer las alegaciones que estimara pertinentes en el acto de la vista.

CUARTO.- Celebrada la vista en el día y hora señalados comparecieron ambas partes, ratificándose la actora en la demanda interpuesta, oponiéndose la demandada, y solicitado el recibimiento del pleito a prueba se acordó por su S.Sª y practicadas las pruebas admitidas tras el trámite de conclusiones se acordó traer los autos a la vista para Sentencia.

QUINTO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- La actora basa su recurso esencialmente en que el mes de marzo de 2020, REALE SEGUROS GENERALES, S.A. tenía concertada con [REDACTED] una póliza de seguros del ramo "AUTO REALE", asegurando el vehículo Opel Mokka matrícula [REDACTED] con el número de póliza [REDACTED] y el pasado día 31 de marzo de 2020, el [REDACTED] estacionó su vehículo Opel Mokka matrícula [REDACTED] en la Avenida Sor Teresa Prat de Málaga y cuando fue a retirarlo se encontró encima del meritado vehículo una rama de grandes dimensiones que produjo daños en la carrocería del mismo ascendiendo el coste de reparación a la cantidad de 1.174,67 Euros y como consecuencia de lo anterior Reale Seguros Generales abonó a la empresa Talleres de Chapa y Pintura García Marín la cantidad de 934,68.-€. mientras que el asegurado en la misma reclama 240.-€, correspondientes con la franquicia.

SEGUNDO.- Por la Administración demandada se solicitó la desestimación del recurso al no haberse ampliado el presente recurso Contencioso-Administrativo a la resolución expresa posteriormente dictada que al ser de inadmisión tiene un sentido distinto al desestimatorio del silencio administrativo y por lo tanto ha quedado firme y consentida, siendo además que concurre la falta de legitimación pasiva dado que la obligación de mantenimiento de las zonas verdes correspondía a la empresa FCC S.A. siendo que no existió una orden directa de la Administración ni vicios del proyecto

TERCERO.- Una vez delimitados los términos del debate hay que decir que del examen del expediente y de la documentación obrante en los autos resulta que el presente recurso Contencioso-Administrativo se interpuso contra la desestimación presunta de la reclamación patrimonial referida por parte del Ayuntamiento de Málaga el cual con fecha 28 de diciembre de 2021 dictó resolución expresa, notificada a el 11 de Enero de 2.022, acordando la inadmisión de la citada solicitud debiendo tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo ha entendido que **sí es**



necesaria la ampliación cuando el acuerdo dictado expresamente ha modificado el presumido silencio siendo que en el presente supuesto a pesar de ello no se amplió el recurso dentro de plazo contra dicha resolución debiendo resaltarse la sentencia del **Tribunal Supremo STS 3126/2015 de 13 de julio de 2015** según la cual: "El artículo 36.1 LJCA utiliza el término "podrá" que empleaba el artículo 46 de la Ley de lo contencioso de 27 de diciembre de 1956, dándole el sentido de que la ampliación del recurso no es necesaria como ha entendido la jurisprudencia de esta Sala salvo en los casos en los que el acuerdo tardío y expreso modifique el presumido por silencio; en esos casos la ampliación sí es una carga de la parte recurrente, como ha recordado la Sentencia de 27 de febrero de 1997 (Apelación 10636/1991), con cita de una sentencia del Tribunal Constitucional (STC 98/1988, de 31 de mayo , FJ 5) Pero, conforme a los más recientes pronunciamientos, hay que entender que la ampliación del recurso es facultativa y no necesaria cuando la pretensión mantiene su virtualidad impugnatoria a pesar de la resolución tardía. En ese caso puede entender legítimamente el recurrente que la resolución tardía no afecta al objeto esencial de su recurso [(así STC 231/2001, de 26 de noviembre ; en parecido sentido Sentencia de esta Sala de 6 de febrero de 2009 (Casación 1887/2007)].

Por consiguiente, no es conforme a Derecho la doctrina de la sentencia impugnada en cuanto, sin la suficiente matización, asocia la pérdida sobrevenida de objeto del proceso iniciado frente a la desestimación presunta por silencio administrativo a la falta de ampliación de la impugnación a la posterior resolución expresa por la Administración. Al contrario, la interpretación correcta del artículo 36. 1 LJCA , de acuerdo con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), exige distinguir los siguientes supuestos

- a) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, satisface íntegramente la pretensión, lo procedente será el desistimiento o la satisfacción extraprocesal de la pretensión (art. 76 LJCA).
- b) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, es plenamente denegatoria de la pretensión, el demandante podrá ampliar el recurso contencioso-



administrativo, conforme al artículo 36.1 LJCA ; pero si no lo hace, no por eso habrá perdido sentido su recurso.

c) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, es parcialmente estimatoria de la pretensión, alterando la situación que deriva de la ficción legal de desestimación que anuda el silencio administrativo negativo, entonces sí, el artículo 36. 1 LJCA impone, en principio, al demandante la carga de ampliar el recurso. Pero la no asunción de ésta sólo comporta la total pérdida sobrevenida de objeto cuando, a la vista del contenido de dicha resolución tardía, la pretensión formulada carece de toda su virtualidad. En otro caso, lo que se produce es la necesaria modificación de la pretensión formulada para adecuarla al contenido del acto administrativo que sustituye a la ficción legal en que consiste el silencio administrativo, entendiéndose que no alcanza ni a lo que se obtiene por dicho acto ni a los aspectos de éste que no podían ser incluidos en la desestimación presunta recurrida y que, por tanto, son ajenos al proceso iniciado...”

CUARTO- Y aplicando la doctrina anteriormente expuesta resulta que en el caso que nos ocupa **la resolución expresa posterior ha modificado el sentido del silencio y por tanto ha quedado sin efecto la resolución recurrida en el presente pleito** y en consecuencia ya no puede ni revocarse ni confirmarse porque es inexistente, debiendo destacarse una vez llegados a este punto que la Jurisdicción Contencioso- Administrativa es, por esencia, una jurisdicción revisora, en el sentido de que es necesario que exista un acto previo de la Administración, para que este pueda ser examinado en cuanto a su adecuación o inadecuación al ordenamiento jurídico, o que, sin acto previo se haya dado a la Administración, posibilidad de dictarlo, examinando todas y cada una de las cuestiones planteadas o las que se deriven del expediente administrativo En definitiva, la función revisora ha de proyectarse sobre la conformidad o disconformidad a Derecho del acto revisado, en consideración al Ordenamiento Jurídico aplicable a la fecha en que este se produjo , sin que sea dable que a falta de pronunciamiento por el órgano



administrativo competente, la Sala pueda proceder a su sustitución, cuya función no es esta, sino contrastar el acto administrativo con el Ordenamiento Jurídico y además que el Tribunal Supremo ha recordado que la desaparición del objeto del recurso ha sido considerada, en muchas otras, como uno de los modos de terminación del proceso contencioso-administrativo; tanto cuando lo impugnado eran disposiciones generales, en que la ulterior derogación de éstas, o su declaración de nulidad por sentencia anterior, ha determinado la desestimación del recurso, no porque en su momento no estuviere fundado, sino porque la derogación sobrevenida de la norma priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real ; como en recursos dirigidos contra resoluciones o actos administrativos singulares, en los que se ha considerado que desaparecía su objeto cuando circunstancias posteriores les privaban de eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de la controversia siendo que la pérdida o carencia sobrevenida del objeto del recurso determina en esta fase procesal su desestimación (TS 3ª sec. 3ª , S 22-04-2003) , por todo lo cual procederá desestimar sin más el presente recurso ya que el presente pleito ha quedado sin objeto al no haberse ampliado el mismo a la resolución expresa posterior lo que en este supuesto era imprescindible al haber desaparecido como ya hemos explicado la resolución inicialmente recurrida.

QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/98, en su redacción dada por Ley 37/2011, procede imponer las costas de este procedimiento a la parte recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO





DESESTIMAR el Contencioso-Administrativo interpuesto por REALE SEGUROS GENERALES S.A. y [REDACTED] representados por el Procurador D. Antonio Castillo Lorenzo contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA todo ello con expresa condena en las costas de este procedimiento a la parte recurrente.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe aclaración en el plazo de dos días ante este Juzgado.

Líbrense Testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos de su razón e inclúyase la misma en el Libro de su clase; y con testimonio de ella, en su caso, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.



